



San Cristóbal de Las Casas, 25 de agosto de 2012

Al pueblo de México
Al pueblo de Chiapas
A las organizaciones democráticas e independientes
A los defensores de los derechos humanos
A los intelectuales progresistas
A la opinión pública

La política fascista y de hambre del gobierno de Felipe Calderón y de los gobiernos locales como el de Juan Sabines, se manifiesta en la criminalización de la protesta popular, reprimiendo al pueblo a sangre y fuego, con un saldo en lo que va de sus sexenios de mas de 100 mil asesinatos, mas de 30 mil desaparecidos, en el encarcelamiento de mas de 100 mil ciudadanos inocentes, el desempleo que asciende a mas de 20 millones de mexicanos y la hambruna ha sido arrastrado el pueblo mexicano que ya se encuentra en la desesperación, porque tan solo este año 2012 ascendió a más del 200% el precio de la canasta básica, mientras los salarios cada vez son más irrisorios.

La crisis no solamente está afectando la canasta básica, con la privatización de la educación, aquellos que tenían el privilegio de tener sus hijos en las escuelas privadas, ahora el salario no les alcanza y las pocas escuelas públicas no se dan abasto para dar este servicio, generándose y multiplicándose las protestas como las del YoSoy132.

A lo anterior hay que agregar el entreguismo de estos gobiernos al institucionalizar el despojo al pueblo a través de las “reformas constitucionales” que pone en bandeja de plata la venta de nuestra soberanía nacional a los oligarcas nacionales y extranjeros.

Cabe destacar que estos despojos también lo realizan mediante el lavado de dinero institucionalizado, a través de cadenas de negocios de intermediarios y prestamistas que

despojan a los ciudadanos de sus pertenencias mediante el embargo.

Los despojos no está solamente en las tierras comunales y ejidales, también está en los pocos bienes que con sudor, trabajo digno y esfuerzo algunos ciudadanos han logrado forjar, para que por alguna necesidad de enfermedad estos usureros se aprovechan de las necesidades para acabarlos de matar.

En este contexto, protestar por el actual orden de cosas en que vive nuestro país, es una necesidad que a todas luces exige nuestra atención, pero sobre todo, a organizarnos. Ante las muertes, despojo a sangre y fuego de las tierras a los campesinos, por la militarización del país, la represión, las desapariciones forzadas, la criminalización de la protesta popular; que no es más que la voracidad de la avaricia de los dueños del poder político y económico, que hacen cada vez más difícil, la subsistencia de la clase trabajadora.

Y es que la oligarquía ha puesto a su nuevo administrador: Enrique Peña Nieto quien dará continuidad a la política antipopular, fascista, a la represión masiva y selectiva contra el pueblo mexicano. La imposición de EPN ha dejado claro, una vez más, que los intereses de la oligarquía nacional y extranjera se imponen sobre la voluntad de la mayoría de los mexicanos, que las decisiones tomadas por los distintos gobiernos en turno jamás han respondido a las necesidades de los mexicanos, que el voto ciudadano jamás ha sido respetado; pues el dominio de la oligarquía es tal que no necesita credibilidad, el ejército se ha prestado para colocar a los peles que le serán útiles.

En vez de resolver las necesidades más apremiantes, el gobierno mexicano ha ahogado en sangre al pueblo mexicano con la permanente militarización del país, con el asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores y luchadoras sociales, los feminicidios, asesinatos de personas sin filiación o militancia política; acciones que los gobiernos en turno no hacen más que mantener en la intimidación y opresión política a la clase trabajadora.

Las contrarreformas constitucionales que se han hecho en esta administración han servido para recrudecer aún más el empobrecimiento del trabajador mexicano, los despidos masivos en distintos sectores, el despojo legalizado y forzoso de las tierras de campesinos, la legalización de la represión, la privatización de la educación, el encarecimiento de la canasta básica que ha afectado a más de 90% de la población en condición de pobreza, que forma parte de la política para saciar las necesidades del sistema capitalista.

El gobierno calderonista y sus huestes, lejos de procurar la seguridad de los mexicanos, de “los ciudadanos”, recurre al ámbito jurídico legaloide, militar, policíaco y a la creación de grupos paramilitares, para justificar la violencia, el despojo, y todas las atrocidades que a han padecido el pueblo con las más de 100 mil muertes extrajudiciales, las más de 30 mil desapariciones forzadas, los mas de 100 mil encarcelados inocentemente.

Se han modificado las leyes, ajustando La Ley de Seguridad Nacional y el Código de Procedimientos penales, que criminaliza a cualquier mexicano o mexicana, y por ser pobres se les coloca como sospechosos, a ser sujetos de investigación, detención, encarcelamiento y en

muchos casos ejecución o desaparición forzada.

En este contexto, en Chiapas Juan Sabines Guerrero repite las mismas prácticas represivas contra el movimiento popular, durante estos seis años nunca resolvió las demandas ancestrales como la regularización de las tierras en posesión, la necesidad de una tarifa justa en el consumo de energía eléctrica.

Se ha ensañado contra las organizaciones democráticas e independientes, promoviendo el paramilitarismo y los grupos de choque que son apoyados y dirigidos por los cuerpos policiacos, esto se refleja en la detención extrajudicial de Dulce María González Santiesteban y Julio César Morales Sántiz; quienes se desempeñaban como comisionados de derechos humanos de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la defensa por el derecho al trabajo, presos injustamente desde el 1 de julio en el CERESO 5 de San Cristóbal de Las Casas, bajo los cargos de lesiones calificadas, pero sin que existan pruebas suficientes de tal acusación.

A pesar de no encontrarles ningún delito con pruebas fehacientes y suficientes han sido sentenciados a 2 años y 7 meses de prisión, hecho que refleja la mezquina forma de resolver los problemas sociales, manteniendo como rehenes políticos a compañeros que han luchado por un trabajo digno.

Con la política fascista que cada vez más va en ascenso, consideramos que el próximo gobernante de Chiapas será aun más represivo porque es el representante directo de Carlos Slim, quien tiene permisos tácitos para explotar las regiones donde existen minerales y riquezas naturales, que este próximo gobernante se lo hará realidad. Para ello intensificará la creación de las aldeas modelo que traerán como consecuencia el despojo de tierras de miles de campesinos e indígenas.

Por esa razón, como dijimos, necesaria es la organización y la protesta antes estos actos de barbarie perpetrados por los responsables del Estado.

Por ello el día de hoy iniciamos una jornada de lucha por la liberación de los compañeros presos políticos, que contempla:

- La instalación de dos plantones indefinidos, uno en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, y el segundo en el Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, con el fin de exigir la libertad de la compañera Dulce María González Santiesteban y el compañero Julio César Morales Sántiz.
- La campaña permanente de denuncia y por la presentación con vida de los desaparecidos, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora este 30 de agosto.

Ante esta situación hacemos el llamado a los organismos defensores de los derechos humanos a estar atentos a la presente jornada de lucha.

¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país!

¡Libertad inmediata e incondicional de Dulce María González Santiesteban y Julio César Morales Sántiz!

¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos!

¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS